



MANUEL GARCÍA PARDO
PRESIDENTE DE APPA-BIOMASA Y MIEMBRO
FUNDADOR DE PROBIOMASA

Biomasa, la renovable que más empleo genera

De entre los obstáculos que están impidiendo el desarrollo de la biomasa en España, el principal es la no consideración de sus rasgos diferenciales respecto al resto de renovables.

Todas las políticas energéticas de la UE desde hace décadas están dirigidas de forma inequívoca, tanto estratégica como instrumentalmente, a potenciar la sostenibilidad del sistema energético del conjunto comunitario, la reducción de la producción a base de recursos fósiles y a potenciar las energías renovables. Entre las fuentes que mayores beneficios de todo tipo inducen están las biomásas, porque a sus beneficiosos efectos directos –mayor creación de empleo, mayor reducción de emisiones y por tanto menor coste de compra de derechos de emisión, etc.– añade una singular re-

ducción de consumos de recursos fósiles, genera importantes beneficios para los sectores agrícola, ganadero y forestal, así como una sensible reducción de costes derivados de la extinción de incendios forestales y una creciente utilización de recursos medioambientalmente limpios.

La biomasa es plenamente gestionable, ya que puede producir energía las veinticuatro horas de todos los días del año y utiliza recursos íntegramente nacionales colaborando así al equilibrio de nuestra balanza exterior y ahorrando importantes gastos de importación de recursos fósiles. Por tanto la promoción de las biomásas

debe ser un objetivo prioritario de las políticas públicas y por tanto debe rectificarse lo antes posible la dura moratoria impuesta, máxime cuando es la única renovable que no sólo no alcanzó los objetivos asignados en el anterior PER, sino que en el actual estos representan solo un 3% del total del mix energético nacional y hasta un 56% menos que en el anterior PER.

Tanto la moratoria impuesta por el Gobierno como la tasa del 6% (y no digamos si se sube al 7%) puede dificultar en sumo grado el desarrollo de las plantas ya en marcha y su viabilidad futura, puesto que la rentabilidad media habitual en ellas era ya muy ajustada, como lo prueba el que los grandes operadores energéticos no se hayan interesado nunca en esta actividad y que la implantación de las plantas de biomasa en España sea muy escasa frente a lo que acontece en los principales países del mundo y, en especial, los más avanzados de la UE. Las medidas restrictivas del Gobierno español han dado definitivamente la puntilla, además, a las plantas en proyecto, porque con ellas es prácticamente imposible alcanzar la mínima rentabilidad.

De entre los obstáculos que están impidiendo el desarrollo de la biomasa en España, el principal es la no consideración de los aspectos propios, los rasgos diferenciales de la biomasa respecto al resto de renovables, en las que no hay que llevar el combustible a la planta. Sin embargo sí hay que hacerlo en las de biomasa, donde el combustible no llega solo (viento, agua,



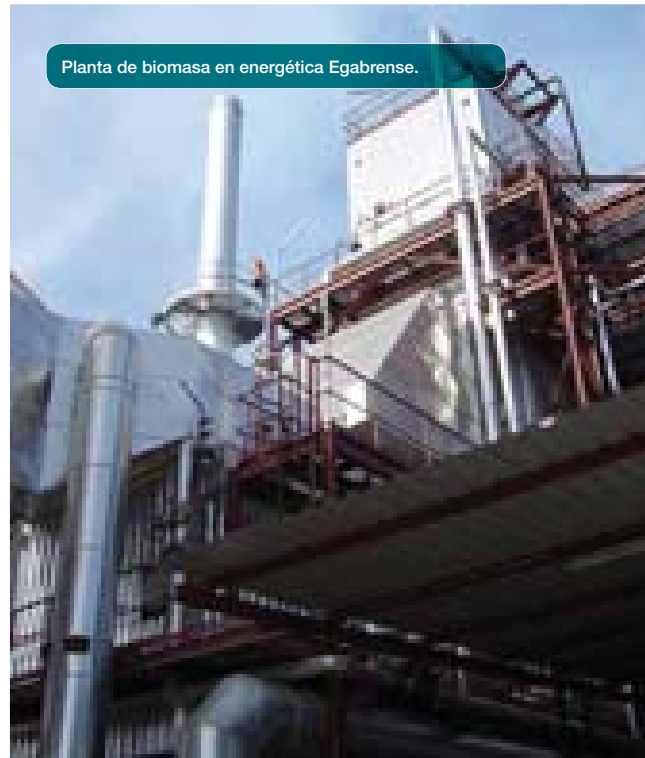
Biodigestión en planta de purines de SENER.

sol...) sino que hay que localizarlo, mensurarlo, analizarlo, formalizar el correspondiente contrato de compra o cesión y, sobre todo, trasladarlo desde su lugar de origen a la respectiva planta. No sólo no se han considerado tradicionalmente estas peculiaridades, sino que se han penalizado, cuando son precisamente las que aportan –tanto social como económicamente– el valor añadido que es distintivo de la biomasa, puesto que es la renovable que más empleo crea por unidad producida.

Si se flexibilizara la moratoria para la biomasa y se permitiera la ampliación de la capacidad existente actualmente se obtendrían unos resultados altamente positivos. Para la biomasa eléctrica, la flexibilización de la moratoria podría movilizar inversiones privadas por un valor superior a los 2.700 millones de euros, que generarían 1.735 millones de Valor Añadido Bruto (VAB) directo e indirecto y requerirían en torno a 33.000 trabajadores. La posterior operación y mantenimiento de esas nuevas plantas generaría un impacto positivo de 165,6 millones de euros anuales en términos de VAB y 1.325 puestos de trabajo, y ejercería un efecto de arrastre sobre otros sectores de la economía (especialmente en el medio rural) de 452,6 millones de euros anuales y el mantenimiento anual de más de 8.500 puestos de trabajo directos e indirectos.

Por su parte, la viabilidad de los nuevos proyectos de biogás supondría inversiones privadas por un valor superior a los 1.000 millones de euros, produciría 750 millones de Valor Añadido Bruto directo e indirecto y el mantenimiento de 12.142 puestos de trabajo durante la construcción de estas instalaciones.

Las tareas de operación y mantenimiento generarían un impacto en VAB de 182,6 millones de euros anuales y la creación de 867 puestos de trabajo. Asimismo, se generarían eslabonamientos interindustriales que alcanzarían un VAB, directo e indirecto, de 51,4 millones de euros anuales y la creación de 1.336 puestos de trabajo, directos e indirectos. Asimismo, el cumpli-



Planta de biomasa en energética Egabrense.

miento de los objetivos del PER 2011-2020 con respecto al biogás también supondría un balance económico positivo para el país, situándose su aportación en torno a 114,5 millones de euros anuales.

En lo que respecta a la biomasa térmica para uso residencial e industrial, el cumplimiento de los objetivos del PER a 2020 supondría la realización de inversiones privadas por valor de 1.686 millones de euros, produciría 962 millones de Valor Añadido Bruto directo e indirecto y el mantenimiento de 18.465 puestos de trabajo. Posteriormente, las tareas de operación y mantenimiento asociadas a estas instalaciones generarían eslabonamientos interindustriales que beneficiarían a otras ramas productivas de la economía, y que alcanzarían un VAB, directo e indirecto, de 245,4 millones de euros anuales y un impacto positivo sobre el empleo, directo e indirecto, equivalente a 4.629 puestos de trabajo.

Adicionalmente, la nueva capacidad de generación de calor procedente del aprovechamiento de la biomasa sustituiría el consumo de combustibles fósiles para este fin (gasóleo fundamentalmente), evitando a su vez la emisión de casi 700.000 toneladas de CO₂, lo que representaría un ahorro de en torno a 14 millones de euros al año, sin contar con otras ventajas ambientales

asociadas a la evitación de partículas contaminantes procedentes de la combustión del gasóleo, etc.

Finalmente, el aprovechamiento energético de la Fracción Orgánica de los Residuos Sólidos Urbanos (FORSU) en línea con los objetivos del PER 2011-2020 evitarían la emisión de 5,3 millones de toneladas de CO₂ al año, lo que representa un valor económico de 106,1 millones de euros.

El sector viene pidiendo a los sucesivos Gobiernos que diseñen y aprueben un marco legal propio de la biomasa y no que, como hasta ahora, sea un añadido más dentro de un conjunto que no reconoce las singulares aportaciones sociales, económicas y medioambientales que esta energía limpia induce. Y que

debería incluir la consideración de las externalidades positivas que puede producir en los ámbitos agrícola, ganadero y forestal, en especial su singular capacidad de creación de empleo y los ahorros que induce en compra de emisiones y en prevención de incendios forestales.

El fomento de la producción de energía con biomasa no debe limitarse a cumplir los compromisos de España en materia de energías renovables. El desarrollo de la biomasa debe considerarse como una aportación ineludible a las medidas y reformas necesarias para superar con éxito la actual crisis y para salir cuanto antes fortalecidos de la misma. En ese sentido la flexibilización de la moratoria y la desaparición de la tasa –precisamente al único sector de renovables que no tiene ninguna responsabilidad del déficit de tarifa– favorecería a este sector el cumplimiento de los objetivos fijados por el Ministerio de Industria, Energía y Comercio en su planificación energética, en coherencia con objetivos adicionales de ahorro en materia de gastos de prevención y extinción de incendios, reducción de emisiones de CO₂, gestión y valorización de residuos contaminantes e impulso a la creación de valor añadido y puestos de trabajo estables en el medio rural ◀◀